

	Proceso: GE - Gestión de Enlace	Código: RGE-25	Versión: 01
--	---------------------------------	----------------	-------------

SECRETARIA COMUN - SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION POR ESTADO

CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN	
TIPO DE PROCESO	Ordinario de Responsabilidad Fiscal
ENTIDAD AFECTADA	ADMINISTRACION MUNICIPAL DE NATAGAIMA TOLIMA
IDENTIFICACION PROCESO	112 -081-2018
PERSONAS A NOTIFICAR	LEYLA JULIETA OLMOS Y OTROS, a la Compañía de Seguros LA PREVISORA SA. a través de su apoderado
TIPO DE AUTO	AUTO QUE RESUELVE EL GRADO DE CONSULTA
FECHA DEL AUTO	27 DE MAYO DE 2022
RECURSOS QUE PROCEDEN	NO PROCEDE RECURSO ALGUNO

Se fija el presente **ESTADO** en un lugar público y visible de la Cartelera de la Secretaría Común – Secretaria General de la Contraloría Departamental del Tolima a las 07:00 a.m., del día 3 de Junio de 2022.



ESPERANZA MONROY CARRILLO
Secretaria General

NOTA DE DESFIJACION DEL ESTADO

El presente **ESTADO** permaneció fijado en un lugar público y visible de la Secretaría Común– Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima, desde la hora y fecha fijada hasta el mismo día 3 de Junio hasta las 6:00 pm.

ESPERANZA MONROY CARRILLO
Secretaria General

Elaboró: Juan J. Canal



AUTO QUE RESUELVE GRADO DE CONSULTA

Ibagué Tolima, 27 de mayo de 2022,

Procede el despacho de la Contralora Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima, en uso de las facultades conferidas en la Resolución 0079 de 2001 proferida por este órgano de control, a examinar la legalidad de la decisión contenida en el **AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.006 DE 06 DE MAYO DE 2022 DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON RADICADO N° 112-081-018**, adelantado ante la **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NATAGAIMA – TOLIMA**.

I. COMPETENCIA

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 que reza: *"Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un defensor de oficio, en desarrollo del cual se podrá revisar integralmente la actuación, para modificarla, confirmarla o revocarla, tomando la respectiva decisión sustitutiva u ordenando motivadamente a la primera instancia proseguir la investigación con miras a proteger el patrimonio público."*

Ahora, la Resolución 0079 de 2001 proferida por la Contraloría Departamental del Tolima, establece lo siguiente: *"Primero: Delegar en el despacho de la Contraloría Auxiliar del Departamento del Tolima, el conocimiento en grado de consulta de los asuntos previstos en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000"*.

Por todos los preceptos anteriormente mencionados, el despacho de la Contralora Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima, es competente para resolver el Grado de Consulta del auto No. 006 de fecha 6 de mayo de 2022, por medio del cual la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de este órgano de control, dictó auto de imputación en el proceso de responsabilidad fiscal **No. 112-081-018**.

II. HECHOS QUE ORIGINARON LA INVESTIGACION

Motivó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal ante la Administración Municipal DE NATAGAIMA, el hallazgo fiscal N° 025 de 21 de febrero de 2018, trasladado por la Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, a través de memorando N° 0251-2018-111 fecha 02 de mayo de 2018, el cual se depone en los siguientes términos:

"... responsabilidad fiscal, hacen relación a las presuntas irregularidades presentadas en los Contratos No 49 (Adición), 114 (Adición), 251, 126, 129, 231 de la vigencia 2015 (Ver tabla No 01), suscritos entre el señor **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ**, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima -Tolima, para la época de los hechos y los ciudadanos: LEYLA JULIETA OLMOS, SERGIO HERNANDO LONDOÑO, JUAN PABLO AYERBE, LEONARDO HUMBERTO MOLINA Y JOSE GABRIEL BAUTISTA respectivamente; y en los cuales Natagaima no se dio aplicación a los **acuerdos 22 y 23 del 7 de diciembre de 2012**, los cuales establecen, la obligatoriedad para los contratistas, de pagar estampillas de Pro cultura y Pro Anciano, sobre el valor total de los contratos suscritos con la administración municipal, lo cual aplica para los contratos referidos anteriormente, pero que a pesar de la solicitud de la entidad a los contratistas, para 

cumplir con dicha obligación, estos no dieron cumplimiento al mandato establecido en los acuerdos precitados anteriormente. De esta manera, se establece en el hallazgo 25 de 2018, que como consecuencia de la omisión a los anteriores acuerdos, los contratistas relacionados en el hallazgo, causaron un detrimento patrimonial a la administración municipal en la cuantía de \$840.100.

Tabla No 01

NRO CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CTO ANTES DE IMPUESTOS	VR PENDIENTE DE PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (4%)	VR PENDIENTE DE PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA (1%)	TOTAL DEJADO DE PAGAR
49 ADICION	Leila Julieta Olmos	\$887.000	\$35.480	\$8.870	\$44.350
114ª	Sergio Londoño	\$6.500.000	\$260.000	\$65.000	\$325.000
251	Sergio Hernando Londoño	\$2.600.000	\$104.000	\$26.000	\$130.000
126	Juan Pablo Ayerbe	\$1.845.000	\$73.800	\$18.450	\$92.250
129	Leonardo Humberto Molina	\$3.600.000	\$144.000	36.000	\$180.000
231	José Gabriel Bautista	\$1.370.000	\$54.800	\$13.700	\$68.500
				TOTAL	\$840.100

...

III. ACTUACIONES PROCESALES

1. Auto de asignación No 083 del 15 de mayo de 2018-Folio 01
2. Memorando No 0251-2018-111 del 25 de abril de 2018-Folio 02
3. Hallazgo Fiscal No 25 del 21 de febrero de 2018 Folios 03 al 05
4. Auto de asignación No. 094 de 12 de junio de 2018. (folio 1)
5. Auto de Apertura No 056 del 15 de junio de 2018.Folio 08 al 17.
6. Auto designa Apoderado de oficio. Folio 188 al 189
7. Auto de pruebas No.011 del 14 de marzo de 2022. (folio 245 al 246)
8. Auto mixto de Archivo e imputación de Responsabilidad Fiscal. Folio 294 al 308

IV. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de este órgano de control, emitió auto N° 006 de fecha seis (06) de mayo de 2022, por medio del cual decide Imputar responsabilidad respecto de los señores: **Juan Pablo Ayerbe Betancourth**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.908.991, con ocasión a la ejecución del contrato No 126 de 2015 en solidaridad con el ciudadano **David Mauricio Andrade Ramírez** identificado con c.c No 93.412.311, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos, por la suma de Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos (\$92.250), al señor **Leonardo Humberto Molina**, identificado con la cédula de

ciudadanía número 98.502.807 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 129 de 2015 en solidaridad con el ciudadano **David Mauricio Andrade Ramírez**, identificado con c.c No 93.412.311, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos, por la suma de Ciento Ochenta Mil Pesos (\$180.000), al señor **José Gabriel Bautista Cutiva**, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.345.465 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 231 de 2015 en solidaridad con el ciudadano **David Mauricio Andrade Ramírez** identificado con c.c No 93.412.311, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos, por la suma de Sesenta y Ocho mil Quinientos Pesos (\$68.500). Así mismo, dentro del contenido del auto mixto, se decide Cesar la acción fiscal frente a: **Leila Julieta Olmos**, identificada con c.c No 65.787.125 con ocasión a la ejecución del contrato No 49 Adición de 2015, teniendo en cuenta que se acredita el pago del valor total del detrimento patrimonial investigado, según se mencionó en la parte considerativa, conforme al artículo 111 de la ley 1474 de 2011, y cesar la acción fiscal frente a **Sergio Hernando Londoño Velásquez**, identificado con c.c No 1.111.454.165 con ocasión a la ejecución de los contratos No 114A y 251 de 2015, y **Sergio José Ortiz Javela**, identificado con c.c No 5.829.129, en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social del municipio de Natagaima-Tolima para la época de los hechos y supervisor de los contratos precitados, teniendo en cuenta que se acredita el pago del valor total del detrimento patrimonial investigado, según se mencionó en la parte considerativa, conforme al artículo 111 de la ley 1474 de 2011.

CONSIDERACIONES DE LA CONSULTA

Previo a abordar el análisis del proceso de responsabilidad fiscal **No. 112-081-018**, considera pertinente el Despacho de la Contralora Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima, traer a colación los fundamentos jurisprudenciales y legales del grado de consulta, a saber:

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 610 del 2000, el grado de consulta procede en los siguientes casos:

"ARTICULO 18. GRADO DE CONSULTA. <Artículo modificado por el artículo 132 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por un defensor de oficio, en desarrollo del cual se podrá revisar integralmente la actuación, para modificarla, confirmarla o revocarla, tomando la respectiva decisión sustitutiva u ordenando motivadamente a la primera instancia proseguir la investigación con miras a proteger el patrimonio público. (Subrayado fuera de texto)

Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión deberá enviar el expediente dentro del término de ocho (8) días siguientes a su notificación, a su superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada órgano fiscalizador.

Si transcurridos dos (2) meses de recibido el expediente por el superior no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso.

R

PARÁGRAFO transitorio. Los términos previstos en el presente artículo se aplicarán a los procesos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto ley."

Bajo este contexto, la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el fenómeno jurídico del grado de consulta, mediante Sentencia C-055 de 1993, M.P José Gregorio Hernández Galindo, en los siguientes términos:

"La consulta es un grado de jurisdicción que procede sin necesidad de solicitud por ninguna de las partes comprometidas en el proceso y, en ese sentido, es un mecanismo automático que lleva al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión adoptada por el inferior, generalmente con base en motivo de interés público o con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica de que se trata.

De otro lado, en cuanto a la consulta ya establecida y regulada en un determinado ordenamiento legal, no tiene sentido que su procedencia se relacione con la "reformatio in pejus" ya que, según lo dicho, este nivel de decisión jurisdiccional no equivale al recurso de apelación y, por ende no tiene lugar respecto de ella la garantía que especifica y únicamente busca favorecer al apelante único.

La consulta "busca evitar que se profieran decisiones violatorias no solo de derechos fundamentales sino de cualquier otro precepto constitucional o legal, en detrimento del procesado o de la sociedad.

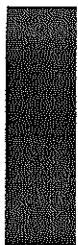
El propósito de la consulta es lograr que se dicten decisiones justas. Y la justicia es fin esencial del derecho"

De esta forma, como quiera que el caso objeto de estudio hace referencia al archivo del proceso de responsabilidad fiscal frente a dos de los investigados, por configurarse la cesación de la acción fiscal, es oportuno traer a colación lo consagrado en el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011, que en su tenor literal reza:

"ARTÍCULO 111. PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL. <Ver Notas del Editor> En el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad."

Precisado lo anterior, se tiene que el objeto del proceso de responsabilidad fiscal, es establecer la materialidad del hecho y la irregularidad del mismo, elementos que al ser demostrados mediante los medios probatorios allegados al proceso, se puede concluir quien o quienes fueron autores, la licitud de la conducta, su culpabilidad y por lo mismo el grado de responsabilidad, aspectos que surgen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodean el hecho y la conducta mostrada por el causante.

Así las cosas, para tasar los anteriores objetivos, es necesario que el fallador aprecie y valore todas y cada una de las pruebas legalmente aportadas al proceso, evaluación que se hará a través del principio de la sana crítica, es decir, apoyado en la lógica, la equidad, la ciencia y la experiencia; además de observar lo previsto en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, según el cual el investigador fiscal debe atender con rigor los elementos



necesarios que estructuran los elementos de la responsabilidad fiscal, como es: *Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, un daño Patrimonial al Estado, un nexo causal entre los dos Elementos anteriores; que solo al reunirse estos tres elementos puede endilgarse responsabilidad de tipo fiscal.*

Con fundamento en los anteriores presupuestos legales y jurisprudenciales, corresponde a este Despacho en sede de consulta, examinar la legalidad del **AUTO MIXTO DE ARCHIVO E IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL N°. 006 DEL 06 DE MAYO DE 2022**, proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima dentro del proceso de responsabilidad fiscal radicado N° 112-081-018, dentro del cual se imputó responsabilidad fiscal a cargo de los señores **JUAN PABLO AYERBE BETANCOURTH**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.908.991, con ocasión a la ejecución del contrato No 126 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade Ramírez identificado con c.c No 93.412.311, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos, por la suma de Noventa y Dos Mil Doscientos Cincuenta Pesos (\$92.250), al señor **LEONARDO HUMBERTO MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.502.807 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 129 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade Ramírez, identificado con c.c No 93.412.311, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos, por la suma de Ciento Ochenta Mil Pesos (\$180.000), al señor **JOSÉ GABRIEL BAUTISTA CUTIVA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.345.465 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 231 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade Ramírez identificado con c.c No 93.412.311, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos, por la suma de Sesenta y Ocho mil Quinientos Pesos (\$68.500). Así mismo, dentro del contenido del auto mixto, se decide Cesar la acción fiscal frente a: **LEILA JULIETA OLMOS**, identificada con c.c No 65.787.125 con ocasión a la ejecución del contrato No 49 Adición de 2015, teniendo en cuenta que se acreditó el pago del valor total del detrimento patrimonial investigado, según se mencionó en la parte considerativa, conforme al artículo 111 de la ley 1474 de 2011, y cesar la acción fiscal frente a **SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ**, identificado con c.c No 1.111.454.165 con ocasión a la ejecución de los contratos No 114A y 251 de 2015 y **SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA**, identificado con c.c No 5.829.129, en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social del municipio de Natagaima-Tolima para la época de los hechos y supervisor de los contratos precitados, teniendo en cuenta que se acreditó el pago del valor total del detrimento patrimonial investigado

Observa el despacho de la Contralora Auxiliar de la Contraloría Departamental del Tolima, que el objeto del presente proceso de responsabilidad fiscal, se enmarca en que revisada la documentación allegada al plenario desde el propio hallazgo fiscal que dio sustento al presente asunto, al realizar un análisis a las actuaciones adelantadas por parte de la Dirección Técnica de Responsabilidad fiscal frente a los investigados, haciendo énfasis en lo atinente a los investigados a los que se les cesó la acción fiscal, y a quienes estuvieron representados por apoderado de oficio designado.

Revisando el contenido de las actuaciones adelantadas por ese despacho, es menester entrar a verificar si las mismas estuvieron ajustadas al ordenamiento y se encuentra dentro del plenario:

Que la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal profirió el Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 056 del 15 de junio de 2018, vinculando como presuntos responsables a los siguientes ciudadanos: **LEYLA JULIETA OLMOS**, identificada con cedula de ciudadanía No 65.787.125 en su condición de contratista para

E

la época de los hechos; **SERGIO HERNANDO LONDOÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.111.454.165 en su condición de contratista para la época de los hechos; **JUAN PABLO AYERBE**, identificado con cedula de ciudadanía No 79.908.991 en su condición de contratista para la época de los hechos; **LEONARDO HUMBERTO MOLINA**, identificado con cedula de ciudadanía No 98.502.807 en su condición de contratista para la época de los hechos; **JOSE GABRIEL BAUTISTA**, identificado con cedula de ciudadanía No 93.345.465 en su condición de contratista para la época de los hechos; **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 93.412.311, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima, en el periodo constitucional 2012 a 2015; **SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA**, identificado con cedula de ciudadanía No 5.829.129, en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social Municipal-Periodo del 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2015; y como tercero civilmente responsable a la siguiente compañía aseguradora: **LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS**, distinguida con el NIT. 860.002.400-2, quien expidió la póliza, Seguro Manejo Global Sector Oficial a favor de la Administración Municipal de Natagaima-Tolima, número 3000014 y amparo fallos con responsabilidad fiscal, con fecha de expedición 22-Enero-2015 y vigencia del 19 de enero de 2015 al 19 de enero de 2016; Auto, que fue comunicado a las compañías aseguradoras precitadas, mediante oficios del día 04 de diciembre de 2017 No SG-2948-2017-130 y SG-2949-2017-130 (Folio 237 y 238 del expediente) respectivamente; Así mismo, este ente de control, expidió citación para notificación personal del auto de apertura a los siguientes presuntos responsables: LEYLA JULIETA OLMOS, SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ, JUAN PABLO AYERBE, LEONARDO HUMBERTO MOLINA, JOSE GABRIEL BAUTISTA, DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ, SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA, mediante los oficios del 11 de julio de 2018 No. SG-1996-2018-130, SG-1997-2018-130, SG-1998-2018-130, SG-1999-2018-130, SG-2000-2018-130, SG-2001-2018-130, SG-2002-2018-130, respectivamente.

Posteriormente se tiene que mediante oficios del 11 de julio de 2018 No SG-2003-2018-130, SG-2004-2018-130, SG-2005-2018-130, SG-2006-2018-130, SG-2007-2018-130, SG-2008-2018-130, SG-2009-2018-130, respectivamente, se realizó citación a versión libre y espontánea, a los precitados presuntos responsables fiscales.

Que los siguientes presuntos responsables se notificaron del Auto de apertura No 056 de 2018, así:

- Sergio Hernando Londoño Velásquez, acta de notificación personal el 16 de julio de 2018. Folio 32.
- Leyla Julieta Olmos, acta de notificación personal del 02 de agosto de 2018. Folio 69.

Teniendo en cuenta las anteriores notificaciones, se realizaron las siguientes versiones libres:

- Sergio Londoño, el 16 de julio de 2018. Folio 33.
- Leyla Julieta Olmos, el 02 de agosto de 2018. Folio 70
- Sergio José Ortiz Javela, el 30 de julio de 2018. Folio 47

Que, mediante auto del 19 de marzo de 2021, la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, designa apoderados de oficio de los señores **JUAN PABLO AYERBE BETANCOURT, LEONARDO HUMBERTO MOLINA GOMEZ, JOSE GABRIEL BAUTISTA CUTIVA, DAVID MAURICIO ANDRADE REMIREZ.** Folio 188 A 189.

De acuerdo a lo anterior, los precitados investigados y que presentaron versión libre y espontánea, expresaron entre otros aspectos, los siguientes:

1. SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ (Folio 33):

(...) En mi calidad de contratista, desde el momento que se estableció la relación contractual para la prestación del servicio como profesor de música, tenía claro la obligación del pago de estampillas sobre el valor contratado, motivo por el cual efectué el pago correspondiente según contratos No 251 y 114A de 2015, en la secretaria de hacienda del municipio de Natagaima -Tesorería; es de aclarar que en el momento no dispongo del soporte de lo pagado, motivo por el cual solicito se pida a la secretaria de hacienda del municipio de Natagaima, la certificación sobre dicho pago (...).

2. SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA (Folio 47)

(...) Yo en el año 2015 me desempeñaba como Secretario de Planeación del Municipio de Natagaima, en el cual, de los números de contratos donde se describe el hallazgo solo fui supervisor en los contratos 49, 114A y 251, aclarando que los contratos 126, 129 y 231 no fui supervisor y anexo los últimos tres contratos mencionados, destacando en cada uno de ellos quienes fueron los supervisores de dichos contratos. Anexo 19 folio. Adicional dentro del proceso del pago de las estampillas Adulto Mayor y Pro Cultura del Municipio de Natagaima, la Oficina encargada de realizar ese recaudo es la Secretaría de Hacienda Municipal que por su naturaleza es la única que puede realizar ese proceso. Del Contrato 49 se anexa el pago del valor de las estampillas Adulto Mayor y Pro cultura de la contratista Leila Julieta Olmos, del cual yo era supervisor. De los contratos 114 A y 251 de 2015, donde el contratista es el señor Sergio Hernando Londoño, no canceló las estampillas Pro Cultura y Adulto Mayor, que le exigía el contrato. Yo me comunico con El vía telefónica al celular 3177294953 el cual me informa que reconoce la deuda que tiene el Municipio pero que dice no tener plata para cancelarla y que no pagará hasta cuando no la obtenga. También cabe aclarar que en el momento el señor antes mencionado es contratista actual del Municipio de Villa Hermosa Tolima, el cual quiero que lo requieran nuevamente, ya que tiene su investidura de servidor público. Sin embargo yo como supervisor del contrato y con la responsabilidad que eso conlleva, asumiré la responsabilidad cuando la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal haya realizado todas las gestiones de cobro y estas resultaren infructuosas. Máxime cuando se trata de una persona que actualmente ostenta la calidad de servidor público en la Administración Municipal de Villahermosa (...).

3. LEYLA JULIETA OLMOS (Folio 70)

(...) Quiero expresar que no sabía que le estaba debiendo al municipio los valores que se me endilgan por concepto de estampillas, como consecuencia de la adición del contrato No 049 de 2015. Por lo anterior quiero expresar que ya cancele dicho valor en la secretaria de hacienda de la Alcaldía de Natagaima. De lo anterior anexo soporte del recibo de caja No 147 del 04 de mayo de 2018 por valor de \$50.250 (...).

Que en la versión libre y espontánea, la señora Leyla Olmos, quien suscribió el contrato No 049 de 2015, expreso que, ya había cancelado el valor de las estampillas correspondientes al contrato precitado anexando copia del recibo de pago No147 del 04 de mayo de 2018 (Folio 71 del expediente); lo anterior fue certificado por el Secretario de Hacienda del Municipio de Natagaima-Tolima el día 08 de agosto de 2018, según se evidencia a folio 94 del expediente y en consecuencia está probado que la precitada, realizo el resarcimiento pleno del daño endilgado en el auto de apertura No 056 de 2018

R

con ocasión a la celebración y ejecución del contrato precitado, por lo que este despacho ordenara la cesación de la acción fiscal a la vinculada mencionada anteriormente.

Que en la versión libre y espontánea, el señor Sergio José Ortiz Javela, quien se desempeñó como Secretario de Planeación y Desarrollo Municipal, en el periodo del 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2015, expreso que, él no fue supervisor de los contratos No 126, 129 y 231 de 2015, lo cual se evidencia a folio 49 al 67 del expediente, así mismo expreso que la única oficina encargada de hacer el recaudo, por su naturaleza jurídica, era la Secretaria de hacienda municipal. En consecuencia de lo anterior, queda claro y evidenciado que el investigado no participo como supervisor de los contratos precitados y que solo lo hizo en los contratos No 114A y 251 de 2015.

Que mediante oficios del 08 de agosto de 2018 (Folio 72 del expediente) y del 12 de diciembre de 2018 (No SGYG637-Folio 144 del expediente), la Administración Municipal de Natagaima-Tolima, remitió respuesta a la solicitud de pruebas de la Contraloría Departamental del Tolima No SG-2012-2018-130 (Folio 36 del expediente).

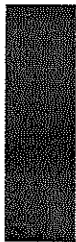
Mediante auto de pruebas No 011 del 14 de marzo de 2022 (Folios 245 al 246 del expediente), la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima, ordenó la práctica de unas pruebas a petición de parte ante la Administración Municipal de Natagaima-Tolima.

Mediante oficio No CDT-RS-2022-00001235 del 18 de marzo de 2022, la Contraloría Departamental del Tolima requiere a la Administración Municipal de Natagaima-Tolima para que suministre la información decretada en el auto de pruebas No 011 del 14 de marzo de 2022 y en razón a ello la referida entidad, remite mediante correo electrónico del día 19 de abril de 2022 la información solicitada (Folio 292 a 293 del expediente).

Que respecto a lo anterior, se evidencia a folio 293 del expediente, la certificación expedida por la Secretaria de Hacienda del municipio de Natagaima-Tolima, en la cual se expresa que el señor SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ, identificado con c.c No 1.111.454.165, cancelo el valor de las estampillas correspondientes a los contratos No 114ª y 251 de 2015 y en consecuencia está probado que el precitado, realizo el resarcimiento pleno del daño endilgado en el auto de apertura No 056 de 2018 con ocasión a la celebración y ejecución de los contratos citados anteriormente, por lo que este despacho ordenara la cesación de la acción fiscal y de igual manera para el señor SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA, vinculado a la presente investigación en su condición de Secretario de Desarrollo Social del municipio y supervisor de los contratos en cuestión.

Ahora bien, en lo que respecta a la conducta establecida en la Ley 610 de 2000, la conducta, para efectos de la Responsabilidad Fiscal debe establecerse a título de dolo o culpa grave, la cual se demuestra dentro del proceso.

Al respecto, la Corte en la Sentencia C-512/13 señala: *"observa la Corte que, en términos generales, los hechos en los que se fundamentan las presunciones de dolo y de culpa grave consagradas en las normas que se impugnan, se refieren a probabilidades fundadas en la experiencia que por ser razonables o verosímiles permiten deducir la existencia del hecho presumido. Así mismo, aprecia que dichas presunciones persiguen finalidades constitucionalmente valiosas pues al facilitar el ejercicio de la acción de repetición en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes, permiten alcanzar los objetivos de garantizar la integridad del patrimonio público y la moralidad y eficacia de la función pública (arts. 123 y 209 de la C.P.)"*



Y posteriormente indica la Corte: "La circunstancia de que la Ley prevea presunciones no vulnera per se el debido proceso, pues se trata de dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos relevantes y de proteger bienes jurídicos valiosos, conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia. Las presunciones deben obedecer a la realidad empírica y perseguir un fin constitucionalmente valioso. Y deben hacerlo de manera razonable y proporcionada. En la medida en que es posible desvirtuarlas, por medio de pruebas idóneas, las presunciones no vulneran el debido proceso, ni el derecho de defensa, ni menoscaban las garantías mínimas de las personas afectadas por ellas"

Y agrega la Corte: "Presunciones simplemente legales que la Corte encuentra razonables, en la medida que ha sido la propia Ley la que le fija a los administradores el marco general de su actuación, obrar de buena fe, de manera leal y con la diligencia de "un buen hombre de negocios", lo cual no puede más que denotar la profesionalidad, diligencia y rectitud con la que deben actuar los administradores en bienestar de los intereses de la sociedad y de sus asociados, atendiendo la importancia y relevancia del papel que cumplen en el desarrollo de sus funciones y el alto grado de responsabilidad que asumen por la gestión profesional que se les encomienda."

En los procesos administrativos de responsabilidad patrimonial el legislador puede prever que, a partir de ciertos antecedentes o circunstancias ciertas y conocidas, es posible deducir un hecho, a modo de presunción. La mera existencia de una presunción en el contexto de estos procesos no vulnera per se el debido proceso, ya que de una parte su existencia busca dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos relevantes y, de otra, busca proteger bienes jurídicos valiosos, conforme a la lógica y a la experiencia. Además, las presunciones pueden desvirtuarse por medio de pruebas idóneas, al controvertir los antecedentes o circunstancias que dan soporte a la presunción.

En lo que tiene que ver con la conducta del señor **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ**, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima para la época de los hechos, es claro que suscribió los siguientes contratos según se relaciona a continuación (Folios 49 a 67 del expediente):

Tabla No 01

NRO CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CTO ANTES DE IMPUESTOS	VR PENDIENTE DE PAGO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR (4%)	VR PENDIENTE DE PAGO ESTAMPILLA PROCULTURA (1%)	TOTAL DEJADO DE PAGAR
126	Juan Pablo Ayerbe	\$1.845.000	\$73.800	\$18.450	\$92.250
129	Leonardo Humberto Molina	\$3.600.000	\$144.000	36.000	\$180.000
231	José Gabriel Bautista	\$1.370.000	\$54.800	\$13.700	\$68.500
				TOTAL	\$340.750

De acuerdo a lo anterior se encuentra que la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente de la Contraloría Departamental del Tolima, al realizar auditoria exprés, constató que La administración Municipal de Natagaima-Tolima no dio estricto cumplimiento a lo establecido en los acuerdos municipales No 22 y 23 de diciembre 7 de 2012, los cuales hacen referencia a la obligación que le asiste a los contratistas del pago de contribuciones que gravan el objeto contractual, dentro de los cuales se encuentra el pago de "Estampilla

Pro-Cultura y Bienestar del Adulto Mayor”, concediendo exenciones de pago de dichos tributos, ocasionando una pérdida de recursos públicos, en la celebración de los contratos precitados en la tabla No 1, por valor de \$340.750.

Que de acuerdo a la certificación expedida por la Administración Municipal de Natagaima-Tolima, el día 30 de noviembre de 2018 (Folio 146 del expediente) y en relación a las acciones realizadas por la anterior, para hacer efectivo el cobro de las estampillas a que había lugar sobre los contratos mencionados en la Tabla No 01, no existen en los archivos de la Secretaria de Hacienda de la entidad, evidencias de la gestión de cobro de la estampillas en cuestión con ocasión a la contratación mencionada en la tabla precitada.

Ahora bien, la dirección en competencia, con relación a la responsabilidad directa del señor DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ, en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima, para la época de los hechos, consideró que el investigado desplegó una conducta omisiva en lo que tiene que ver con la exigencia de pago de las estampillas, la cual se encuadrada a título de culpa grave; pues omitió sus funciones y deberes legales que le eran exigibles de conformidad con su cargo, conculcados conductualmente por omisión en calidad de gravemente culposa una vez confrontados con el manual específico de funciones y de competencias laborales, tales como ser el nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la ley, los reglamentos y los estatutos.

Además consideró el operador de instancia que la actuación del investigado, no estuvo conforme a lo consagrado en Ley 80/93 ni en lo estipulado en los acuerdos No 022 y 023 de 2012, artículos tercero y cuarto los cuales expresan que, la obligación de exigir la estampilla Pro cultura y Bienestar del Adulto Mayor estará a cargo de los funcionarios públicos y privados que intervienen en la suscripción del acto, documento o actuación administrativa y en sus parágrafos expresan que, los servidores públicos y privados obligados a exigir la estampilla o recibo de pago de la misma, que omitieren su deber, serán responsables de conformidad con la Ley.

Es claro entonces, que conforme a esta norma emitida por el Concejo Municipal de Natagaima-Tolima, los responsables de velar por el cumplimiento, recaudo y liquidación de las estampillas del Municipio son los servidores públicos que intervengan en la celebración o legalización del acto contractual, que para el caso que nos ocupa corresponde al señor David Mauricio Andrade entre otros, habida cuenta que suscribió los Contratos de prestación de servicios No 126, 129 y 231 de 2015 con los siguientes: Juan Pablo Ayerbe, Leonardo Humberto Molina y José Gabriel Bautista y no exigió el pago de las estampillas según se mencionó respectivamente.

De acuerdo a lo anterior, considera la Dirección Técnica de Responsabilidad fiscal que se evidencia que, el señor **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ**, no realizó ninguna gestión efectiva, tendiente a aplicar los acuerdos No 022 y 023 de 2012 los cuales establecen la obligatoriedad del pago de estampillas de Pro Cultura y Pro Adulto Mayor, equivalentes al 1% y 4% del monto de los contratos en cuestión respectivamente, antes de impuestos, lo que indica que su omisión tiene una relación directa con el daño patrimonial endilgado, pues más allá del manual de funciones; le asistía como servidor público el deber legal de velar por el pago de las estampillas, según los artículos 3 y 4 de los acuerdos precitados respectivamente.

Así las cosas, determinó ese despacho, que al señor **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ**, le asistía una responsabilidad directa con los hechos aludidos, en su condición de gestor fiscal, pues le era exigible velar por el cobro de las estampillas Municipales en



los términos indicados en el Acuerdo No 022 y 023 de 2012, el cual desconoció inexplicablemente, omitiendo emplear los controles y las acciones administrativas tendientes al cumplimiento de las mismas.

Visto lo anterior, es preciso advertir que, el señor Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima, para la época de los hechos, está incurso en Culpa Grave, pues, al ser gestor fiscal, no estuvo atento a verificar, la aplicación inexcusable de los acuerdos referidos anteriormente que establecen el pago obligatorio de las estampillas en cuestión y relacionados en la tabla No 01.

Al analizar en conjunto las pruebas aportadas al proceso, así como el Manual de Funciones propias del cargo de Alcalde Municipal de la época de los hechos, se infiere que el ciudadano David Mauricio Andrade, evidencio inobservancia a las funciones asignadas en el Manual de la entidad (Resolución No 115 del 03 de noviembre de 2006. Folio 261 al 262 del expediente), especialmente las referidas a: *"Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo"*; y además de: *"Ordenar los gastos y celebrar contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables"*; con lo cual es claro que, no dirigió de manera eficaz y efectiva la acción administrativa del municipio y no observo las normas jurídicas aplicables en materia de tributos, según se estableció en los acuerdos No 022 y 023 de 2012, por lo que se concluye además, que pasó desapercibido el grado de confianza que generaba el cargo que ostentaba, contribuyendo a causar un detrimento patrimonial en la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA (\$340.750)**., siendo este el valor total, que debieron cancelar los contratistas por concepto de estampillas, según se mencionó en la Tabla No 01 del presente proveído.

La Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal estableció en el auto en comento que con relación a la conducta de los ciudadanos: **Juan Pablo Ayerbe, Leonardo Humberto Molina y José Gabriel Bautista** quienes concurren como personas naturales y a su vez como contratistas, se deja en evidencia dentro del Hallazgo Fiscal No. 025 del 01 de febrero de 2018, (Folios 03 al 05 del expediente), el incumplimiento de los requisitos de los contratos número 126, 129 y 231 de 2015, en lo que tiene que ver con el pago del impuesto del 1% del valor de los contratos, por concepto del pago de la estampilla "Pro-Cultura" y del 4% del valor de los contratos por concepto del pago de la estampilla Pro Anciano (Acuerdo No 022 y 023 de 2012), tratándose de un tributo que corresponde a las tasas parafiscales y corresponde exclusivamente a cargo del contratista.

Así mismo y tratándose del cumplimiento de un contrato estatal, es preciso acudir al artículo 1602 del Código Civil como fuente normativa que consagra **"LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES**. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Y en lo que tiene que ver con su ejecución el artículo 1603 del Código Civil contempla: **EJECUCION DE BUENA FE**. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella.

Adicionalmente es pertinente reiterar que los acuerdos No 022 y 023 de 2012 establecen en su artículo primero, como hecho generador lo siguiente: ***"El hecho generador lo constituye la celebración de contratos con la administración central Municipal o sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y Empresas Sociales del Estado – ESE" con jurisdicción en el municipio de NATAGAIMA Tolima***". Y en relación a la base gravable expresan:



Acuerdo No 022 de 2012-Artículo Primero numeral cuarto:

(...) **ARTICULO PRIMERO. Base Gravable:** *La constituye la expedición de los actos administrativos definidos en el presente acuerdo y el valor total del contrato suscrito con la administración central municipal o sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y empresas sociales del estado- ESE con jurisdicción en el municipio de **NATAGAIMA** Tolima, o el valor de cualquier adición de estos (...).*

Y en relación a la tarifa establece:

(...) *Los contratos de prestación de servicios que celebren las personas naturales o jurídicas con la administración central Municipal o sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado y Empresas Sociales del Estado-ESE con jurisdicción en el municipio de **NATAGAIMA** Tolima, pagaran una tarifa del 1% del valor total del contrato, antes de impuestos o del valor de cualquier adición de estos".*

Acuerdo No 023 de 2012-Artículo Primero numeral tercero:

(...) **ARTICULO TERCERO. Base Gravable:** *La constituye el valor total del contrato o cualquier adición de este (...).*

Y en relación a la tarifa establece:

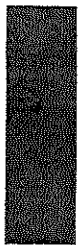
(...) *De conformidad con el artículo 4 de la ley 1276 de 2009, la tarifa será del Cuatro por Ciento (4%) sobre el valor total del contrato o de la adición a este (...).*

Se trata pues de pagos exigibles en cumplimiento de los deberes contractuales asumidos con la suscripción del mismo y el no pago de las estampillas citadas denota la negligencia con la que actuaron los contratistas, al no emplear el debido cuidado que aún personas negligentes emplearían en el cumplimiento de un requisito legal, lo que denota su culpabilidad a título grave, pues su conducta fiscal fue antieconómica y derivó en un daño patrimonial.

Es importante señalar que los acuerdos No 022 y 023 de 2012, por medio de los cuales se regula el cobro de la estampilla Pro Cultura y Pro Anciano, en su Artículos cuarto y Quinto respectivamente, contemplan unas exenciones al pago de estampillas municipales y al realizar su lectura y análisis no se encuentran los Contratos de prestación de Servicios, como para llegar a establecer que los mismos, estuvieran exento del pago de estampillas "Pro-Cultura y Pro Anciano, razón por la cual, la conducta de los contratistas fue omisiva respecto del pago al que legalmente estaban obligados (Folio 254 al 260 del expediente).

Además y aunado a lo anterior; para este Despacho es claro que el desconocimiento de la norma por parte de los contratistas no los exime de responsabilidad; ya que era su deber y obligación conocer las normas existentes vigentes que se debían aplicar para los contratos suscritos y ejecutados según se mencionó en la tabla No 01, para lo cual el Artículo 9º del Código Civil, textualmente señala: Artículo 9º *La ignorancia de las leyes no sirve de excusa". En este mismo sentido el artículo 56 de la Ley 4º de 1913 (Código de Régimen Político Municipal) al respecto señala: "No podrá alegarse ignorancia de la Ley para excusarse de cumplirla".*

De conformidad con lo anterior, resulta plenamente demostrado que los contratistas en cuestión para la época de los hechos; quienes concurren como personas naturales y a su vez como contratistas, estaban obligados a realizar el pago de las estampillas "Pro-Cultura y Pro Anciano, máxime cuando se trataba de contratos de prestación de servicios que no están exceptuados en los acuerdos No 022 y 023 de 2012. Así las cosas, su conducta



omisiva respecto del pago correspondiente del 1% para la estampilla Pro cultura y del 4% para la estampilla Pro Anciano sobre el valor del contrato antes de IVA, contribuyó al resultado definitivo; por ello debe tenerse en cuenta que la responsabilidad fiscal también cubre a quienes realizan lo que podríamos denominar gestión fiscal negativa indirecta, es decir, todas aquellas personas que no manejan recursos públicos de forma directa pero que determinan o condicionan mediante actuaciones o maniobras a quienes realizan gestión fiscal de forma directa para que causen un daño patrimonial al Estado.

Por lo anterior; considero la dirección Técnica de Responsabilidad en su Auto de Imputación que los ciudadanos: **Juan Pablo Ayerbe, Leonardo Humberto Molina y José Gabriel Bautista** quienes concurren como personas naturales y a su vez como contratistas, al incumplir los anteriores preceptos normativos, incurrieron en una conducta omisiva, habida cuenta que en ellos recaía la obligación de actuar con diligencia en cuanto al pago de la totalidad del porcentaje correspondiente al pago de las estampillas a las que hemos hecho referencia, generando un presunto detrimento patrimonial, pues el no pago de los gravámenes anteriormente precitados, denota apatía y desidia, pues no emplearon el debido cuidado que aún personas indolentes emplearían en el pago de un impuesto de orden municipal, lo que denota su culpabilidad a título grave, por desplegar una conducta omisiva, que presuntamente ocasiono un daño patrimonial al estado.

Ahora bien, en lo que respecta al Daño Patrimonial, Debemos recordar que el daño, es la lesión al patrimonio público, del cual se deriva el perjuicio y la consecuente obligación de resarcirlo, la Ley 610 en el artículo 6º., precisa que se entiende por daño patrimonial al Estado, la lesión representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las Contralorías.

Agrega la disposición que dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzca directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio Público.

Siendo el daño un requisito de procedibilidad del proceso de responsabilidad fiscal, este Despacho al analizar las piezas procesales obrantes al interior del expediente, procede a cuantificar nuevamente, el presunto daño patrimonial en la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$340.750)**, teniendo en cuenta el pago realizado por la Sra. LEYLA JULIETA OLMOS (Folio 71 del expediente) por valor de \$50.250 dentro de los cuales está incluido el valor del daño investigado (\$44.350), así como el pago realizado por el señor **SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ** (Folio 293 del expediente) por valor de \$455.000, por concepto de estampillas de Pro Cultura y Pro Anciano, sumas estas que fueron certificadas por los secretarios de hacienda, RUBEN DARIO ACOSTA LOAIZA y DANIELA PAOLA CORTEZ ZAMBRANO (Folio 159 y 293 del expediente respectivamente), quienes dan fe del ingreso de estos recursos a las arcas del Municipio y bajo el entendido del Artículo 4º. de la Ley 610 de 2000, el cual contempla, que el objeto de la responsabilidad fiscal, es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad; en consecuencia el valor no cancelado **(\$340.750)** y que en esta providencia se establece como presunto daño patrimonial causado por lo señores; **Juan Pablo Ayerbe, Leonardo Humberto Molina**

✓



y **José Gabriel Bautista** en su condición de contratistas, corresponde a una obligación de cada uno de los contratistas, que debió sufragarse antes de la ejecución de los Contratos No 126, 129 y 231 del año 2015, situación que fue objeto del hallazgo fiscal No. 25 de 2018.

Para la Dirección resultó inexcusable que el señor Alcalde Municipal, para la época de los hechos ,haya suscrito y pagado los contratos en cuestión, sin realizar u ordenara realizar, ningún trámite administrativo tendiente a la acreditación del pago por concepto de estampillas que le correspondían a cada uno de los contratistas vinculados, máxime cuando se trata de un deber legal consagrado en los acuerdos municipales No 022 y 023 de 2012 y que además en sus parágrafos respectivos señalan que la obligación de exigir las estampillas de Pro Cultura y Pro Ancianos estará a cargo de los funcionarios públicos y privados que intervienen en la suscripción de los actos y que si omitieren su deber, serán responsables de conformidad con la Ley.

De igual forma fue claro para el operador de instancia, que el presunto daño patrimonial se causó inicialmente por omisión de los señores Contratistas al no dar cumplimiento a sus obligaciones parafiscales y de otra parte, porque de la misma manera el señor Alcalde Municipal, para la época de los hechos, omitió ordenar el respectivo requerimiento e inclusive ordenar realizar el descuento al momento de generar los pagos parciales y saldos de los respectivos contratos, pues estos fueron realizados por medio de consignaciones y no se evidencia ningún trámite en este sentido, por lo tanto la responsabilidad en el presunto daño patrimonial antes mencionado, es de naturaleza solidaria entre el precitado para la época de los hechos y los contratistas, en concordancia con lo establecido en el artículo 119 de la ley 1474 de 2011, el cual expresa: *"En los procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de repetición en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial"*.

Encuentra entonces este Despacho que la dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal determinó de buena forma que debía cesar la acción fiscal frente a la **Sra. Leyla Julieta Olmos y el señor Sergio Hernando Londoño Velásquez en razón a que mediante el pago realizado se efectuó el resarcimiento pleno del daño endilgado sobre los contratos No 49A, 114ª, 251 y en consecuencia solo se imputara responsabilidad fiscal en relación al presunto daño originado por el no pago de estampillas sobre los contratos No 126, 129 y 231 de 2015.**

En lo referente a los montos dejados de cancelar por los conceptos mencionados, es necesario hacer la relación de la responsabilidad solidaria de los vinculados en relación a los contratos cuestionados, de la siguiente manera:

TABLA No 02

Nro CONTRATO	CONTRATISTA	DAVID MAURICIO ANDRADE	TOTAL DEJADO DE PAGAR O DAÑO PATRIMONIAL
126	Juan Pablo Ayerbe	RS	\$92.250
129	Leonardo Humberto Molina	RS	\$180.000
231	José Gabriel Bautista	RS	\$68.500
			\$340.750

RS=Responsabilidad Solidaria

En tal sentido la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal en uso de sus atribuciones y competencias determinó establecer el valor del daño a imputar, de la siguiente manera:

Imputar responsabilidad fiscal al señor Juan Pablo Ayerbe Betancourth, en la cuantía de \$92.250 con ocasión al NO pago de estampillas Pro Cultura y Pro Anciano en el contrato No 126 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos.

Imputar responsabilidad fiscal al señor Leonardo Humberto Molina, en la cuantía de \$180.000 con ocasión al NO pago de estampillas Pro Cultura y Pro Anciano en el contrato No 129 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos.

Imputar responsabilidad fiscal al señor José Gabriel Bautista, en la cuantía de \$68.500 con ocasión al NO pago de estampillas Pro Cultura y Pro Anciano en el contrato No 231 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos.

De la misma forma la citada Dirección Técnica, estableció que la compañía de seguros La Previsora S.A, se encuentra vinculada al presente proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable, con ocasión a la póliza Seguro Manejo Global Sector Oficial No 3000014, la cual contempla como fecha de expedición el 22 de enero de 2015 y vigencia del 19 de enero de 2015 al 19 de enero de 2016. Así mismo se establece un deducible en ella, del 20% del valor de la pérdida y un mínimo de 4 SMMLV para el reconocimiento del daño. Así las cosas es claro que el valor del daño a imputar corresponde a \$347.750, cifra ésta que no cumple con las condiciones de la póliza anteriormente citada y en consecuencia se procederá a la desvinculación respectiva de la compañía de seguros anteriormente mencionada.

En lo concerniente al nexo causal, dentro del Auto de imputación en estudio, se determinó que de acuerdo al material probatorio encontrado en la auditoria y allegado por la entidad, se logra demostrar que hay un presunto detrimento en el patrimonio público de la Administración Municipal de Natagaima-Tolima por valor de \$347.750, por el incumplimiento en el pago del estampillas de Pro-Cultura (1%) y Pro Anciano (4%) sobre el valor de los contratos realizados en la vigencia 2015, los cuales fueron objeto de análisis en el proceso auditor y que se relacionan en la tabla No 1 del presente acto; estos tributos, que aparecen contemplados en los acuerdos Municipales No 022 y 023 de 2012, no fueron tenidos en cuenta por la administración en el momento de la suscripción de los contratos en cuestión ni en el pago realizado a los contratistas, por lo cual se omitió la deducción de los mismos y en consecuencia se establece un nexo causal con el presunto daño, en el entendido que el nexo causal exige no solo la ocurrencia del daño sino que la conducta del funcionario (s) o del particular que ejerce gestión fiscal se haya desplegado de manera gravemente culposa, motivo por el cual este despacho encuentra argumentos

Acordado en Sesión de

Acordado en Sesión de

Acordado en Sesión de

Acordado en Sesión de

Acordado en Sesión de

RS=Responsabilidad Solidaria

En tal sentido la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal en uso de sus atribuciones y competencias determinó establecer el valor del daño a imputar, de la siguiente manera:

Imputar responsabilidad fiscal al señor Juan Pablo Ayerbe Betancourth, en la cuantía de \$92.250 con ocasión al NO pago de estampillas Pro Cultura y Pro Anciano en el contrato No 126 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos.

Imputar responsabilidad fiscal al señor Leonardo Humberto Molina, en la cuantía de \$180.000 con ocasión al NO pago de estampillas Pro Cultura y Pro Anciano en el contrato No 129 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos.

Imputar responsabilidad fiscal al señor José Gabriel Bautista, en la cuantía de \$68.500 con ocasión al NO pago de estampillas Pro Cultura y Pro Anciano en el contrato No 231 de 2015 en solidaridad con el ciudadano David Mauricio Andrade en su condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos.

De la misma forma la citada Dirección Técnica, estableció que la compañía de seguros La Previsora S.A, se encuentra vinculada al presente proceso de responsabilidad fiscal como tercero civilmente responsable, con ocasión a la póliza Seguro Manejo Global Sector Oficial No 3000014, la cual contempla como fecha de expedición el 22 de enero de 2015 y vigencia del 19 de enero de 2015 al 19 de enero de 2016. Así mismo se establece un deducible en ella, del 20% del valor de la pérdida y un mínimo de 4 SMMLV para el reconocimiento del daño. Así las cosas es claro que el valor del daño a imputar corresponde a \$347.750, cifra ésta que no cumple con las condiciones de la póliza anteriormente citada y en consecuencia se procederá a la desvinculación respectiva de la compañía de seguros anteriormente mencionada.

En lo concerniente al nexo causal, dentro del Auto de imputación en estudio, se determinó que de acuerdo al material probatorio encontrado en la auditoria y allegado por la entidad, se logra demostrar que hay un presunto detrimento en el patrimonio público de la Administración Municipal de Natagaima-Tolima por valor de \$347.750, por el incumplimiento en el pago del estampillas de Pro-Cultura (1%) y Pro Anciano (4%) sobre el valor de los contratos realizados en la vigencia 2015, los cuales fueron objeto de análisis en el proceso auditor y que se relacionan en la tabla No 1 del presente acto; estos tributos, que aparecen contemplados en los acuerdos Municipales No 022 y 023 de 2012, no fueron tenidos en cuenta por la administración en el momento de la suscripción de los contratos en cuestión ni en el pago realizado a los contratistas, por lo cual se omitió la deducción de los mismos y en consecuencia se establece un nexo causal con el presunto daño, en el entendido que el nexo causal exige no solo la ocurrencia del daño sino que la conducta del funcionario (s) o del particular que ejerce gestión fiscal se haya desplegado de manera gravemente culposa, motivo por el cual este despacho encuentra argumentos



conforme a derecho, y los imputados están siendo representados por apoderados de oficio debidamente nombrados y posesionados para actuar en nombre y representación de los mismos.

Sobre el particular se aclara y precisa que los documentos aportados como pruebas fueron apreciados integralmente en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional como lo estipula el artículo 26 de la Ley 610 de 2000.

En consecuencia, conforme a las consideraciones fácticas y jurídicas esbozadas anteriormente, se confirmará en todas sus partes, el Auto Mixto de Archivo e Imputación de Responsabilidad Fiscal, proferido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Departamental del Tolima dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal No. **112-081-018**.

debidamente nombrados y posesionados para actuar en nombre y representación de los mismos.

Por último, se advierte que en el evento que aparezcan o se aporten nuevas pruebas que acrediten la existencia de un daño al erario del Estado, o la responsabilidad del Gestor Fiscal, o se demuestre que la decisión se basó en pruebas falsas, frente a los investigados a quienes se cesa la acción fiscal, se procederá a la reapertura del proceso, de conformidad al artículo 17 de la Ley 610 de 2000.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el Despacho de la Contralora Auxiliar Encargada de la Contraloría Departamental del Tolima,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO:

CONFIRMAR en todas sus partes la decisión proferida por la Dirección de Responsabilidad Fiscal en el Auto No. 006 del día seis (6) de mayo de 2022, por medio del cual se imputa responsabilidad fiscal frente a los señores **JUAN PABLO AYERBE BETANCOURTH**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.908.991, con ocasión a la ejecución del contrato No 126 de 2015, al señor **LEONARDO HUMBERTO MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.502.807 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 129 de 2015, al SEÑOR **JOSÉ GABRIEL BAUTISTA CUTIVA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.345.465 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 231 de 2015 y frente a los anteriores, solidariamente al señor **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMÍREZ** identificado con c.c No 93.412.311, en su Condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos. Así mismo, dentro del contenido del auto mixto, se decide Cesar la acción fiscal frente a: **LEILA JULIETA OLMOS**, identificada con c.c No 65.787.125 con ocasión a la ejecución del contrato No 49 Adición de 2015, teniendo en cuenta que se acredita el pago del valor total del detrimento patrimonial investigado, cesar la acción fiscal frente a **SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ**, identificado con c.c No 1.111.454.165 con ocasión a la ejecución de los contratos No 114A y 251 de 2015, y al señor **SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA**, identificado con c.c No 5.829.129, en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social del municipio de Natagaima-Tolima para la época de los hechos y supervisor de los contratos precitados,

Por lo tanto, se decide:

CONFIRMAR en todas sus partes la decisión proferida por la Dirección de Responsabilidad Fiscal en el Auto No. 006 del día seis (6) de mayo de 2022, por medio del cual se imputa responsabilidad fiscal frente a los señores **JUAN PABLO AYERBE BETANCOURTH**, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.908.991, con ocasión a la ejecución del contrato No 126 de 2015, al señor **LEONARDO HUMBERTO MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.502.807 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 129 de 2015, al SEÑOR **JOSÉ GABRIEL BAUTISTA CUTIVA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.345.465 de 2015, con ocasión a la ejecución del contrato No 231 de 2015 y frente a los anteriores, solidariamente al señor **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMÍREZ** identificado con c.c No 93.412.311, en su Condición de Alcalde Municipal de Natagaima-Tolima de la época de los hechos. Así mismo, dentro del contenido del auto mixto, se decide Cesar la acción fiscal frente a: **LEILA JULIETA OLMOS**, identificada con c.c No 65.787.125 con ocasión a la ejecución del contrato No 49 Adición de 2015, teniendo en cuenta que se acredita el pago del valor total del detrimento patrimonial investigado, cesar la acción fiscal frente a **SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ**, identificado con c.c No 1.111.454.165 con ocasión a la ejecución de los contratos No 114A y 251 de 2015, y al señor **SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA**, identificado con c.c No 5.829.129, en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social del municipio de Natagaima-Tolima para la época de los hechos y supervisor de los contratos precitados,

Por lo tanto, se decide:

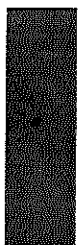
teniendo en cuenta que se acreditó el pago del valor total del detrimento patrimonial investigado, según se mencionó en la parte considerativa, conforme al artículo 111 de la ley 1474 de 2011, y las consideraciones expuestas en la presente providencia.

ARTICULO SEGUNDO:

En el evento que con posterioridad a la presente decisión aparecieran nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo frente a los señores **LEILA JULIETA OLMOS**, identificada con c.c No 65.787.125, **SERGIO HERNANDO LONDOÑO VELASQUEZ**, identificado con c.c No 1.111.454.165 y **SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA**, identificado con c.c No 5.829.129, en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social del municipio de Natagaima-Tolima para la época de los hechos y supervisor de los contratos o se demostrare que la decisión se basó en prueba falsa, se ordenará la reapertura de la actuación fiscal, de conformidad con el artículo 17 de la ley 610 de 2000.

ARTÍCULO TERCERO:

Notificar por **ESTADO** y por Secretaria General el contenido de la presente providencia, de conformidad con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 a contra los señores **LEYLA JULIETA OLMOS**, identificada con cedula de ciudadanía No 65.787.125 en su condición de contratista para la época de los hechos; **SERGIO HERNANDO LONDOÑO**, identificado con cedula de ciudadanía No 1.111.454.165 en su condición de contratista para la época de los hechos; **ANA MARIA CARLOS ORTIZ**, identificada con c.c No 1.005.720.011 estudiante adscrita al consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué-Tolima, en su condición de apoderada de oficio del señor **JUAN PABLO AYERBE BETANCOURTH**, identificado con cedula de ciudadanía No 79.908.991; **PAULA ANDREA MUÑOZ CASTELLANOS**, identificada con c.c No 115.220.1175 estudiante adscrita al consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué-Tolima, en su condición de apoderada de oficio del señor **LEONARDO HUMBERTO MOLINA**, identificado con cedula de ciudadanía No 98.502.807; **JUAN PABLO CALDERON GUZMAN**, identificado con c.c No 1.007.411.193 estudiante adscrito al consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué-Tolima, en su condición de apoderado de oficio del señor JOSE GABRIEL BAUTISTA CUTIVA, identificado con cedula de ciudadanía No 93.345.465; **MONICA ALEJANDRA CORVACHO QUEVEDO**, identificado con c.c No 1.019.098.204 estudiante adscrito al consultorio jurídico de la Universidad de Ibagué-Tolima, en su condición de apoderada de oficio del señor **DAVID MAURICIO ANDRADE RAMIREZ**, identificado con cedula de ciudadanía No 93.412.311; **SERGIO JOSE ORTIZ JAVELA**, identifica do con cedula de ciudadanía No 5.829.129; en su condición de Secretario de Planeación y Desarrollo Social Municipal-Periodo del 02 de enero de 2012 al 30 de diciembre de 2015; LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS Nit_860.002.400-2, en su condición de tercero



civilmente responsable, con ocasión a la expedición de la póliza de Seguro Manejo Global Sector Oficial No 3000014, con fecha de expedición el 22 de enero de 2015 y vigencia del 19 de enero de 2015 al 19 de enero de 2016.

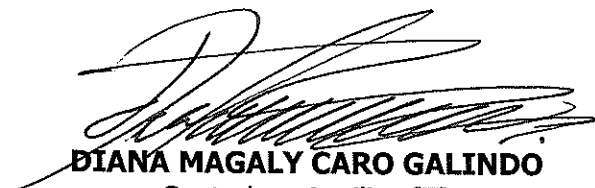
ARTÍCULO CUARTO:

En firme y ejecutoriado el presente auto, por intermedio de la Secretaría General y Común de la Contraloría Departamental del Tolima, devuélvase el expediente, a la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal para lo correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO:

Contra el presente auto no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


DIANA MAGALY CARO GALINDO
Contralora Auxiliar (E)